



Resolución No. CSJBOR23-1283
Cartagena de Indias D.T. y C., 13 de octubre de 2023

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No: 13001-11-01-002-2023-00703

Solicitante: Solón Raúl Ferreira Pardo

Despacho: Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena

Servidor judicial: María Bernarda Vargas Lemus y Cielo Troncoso Álvarez

Tipo de proceso: Verbal

Radicado: 13001311000320220008200

Magistrado ponente: Iván Eduardo Latorre Gamboa

Fecha de sesión: 11 de octubre de 2023

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el 31 de agosto de 2023, el señor Solón Raúl Ferreira Pardo solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado No. 13001311000320220008200, que cursa en el Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, debido a que, según indica, se encuentra pendiente de resolver solicitud de adición de auto adiado el 24 de octubre de 2022.

Sin embargo, al revisar la solicitud se observa que el quejoso indica que por auto adiado el 2 de febrero de 2023 se resolvió adicionar la providencia de calendas 24 de octubre de 2022, pero afirma que ha presentado memoriales de impulso y, a la fecha, el despacho se encuentra en mora de pronunciarse sobre lo requerido.

Por lo anterior, mediante Auto CSJBOAVJ23-886 del 5 de septiembre de 2023, se requirió al solicitante para que ampliara la solicitud, quien dentro del término concedido allegó escrito mediante el cual subsanó la petición.

1.2 Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante auto CSJBOAVJ23-926 del 21 de septiembre de 2023, se dispuso requerir a las doctoras María Bernarda Vargas Lemus y Cielo Troncoso Álvarez, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, el cual fue comunicado por mensaje de datos el 25 de septiembre de la presente anualidad; sin embargo, el término concedido venció sin que las servidoras judiciales atendieran la solicitud de informe.

1.3 Explicaciones

Consideró el despacho sustanciador, frente al silencio de las servidoras judiciales, que existía mérito para aperturar la vigilancia judicial administrativa respecto de las doctoras María Bernarda Vargas Lemus y Cielo Troncoso, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, por lo cual se les requirió las explicaciones con el fin de verificar la configuración de acciones u omisiones que atenten contra una oportuna y eficaz administración de justicia, lo que se dio mediante

Auto CSJBOAVJ23-972 del 2 de octubre de 2023, en el que se les solicitó que indicaran las justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretendieran hacer valer, para explicar la presunta mora judicial alegada, para lo cual se les otorgó el término de tres días contados a partir de su comunicación, la cual se surtió el 3 de octubre siguiente.

Dentro del término concedido, la doctora María Bernarda Vargas Lemus, jueza, allegó las explicaciones solicitadas e indica que el 11 de noviembre de 2022 se recibió solicitud de adición de la providencia adiada el 24 de octubre de 2022.

Que el despacho se pronunció el 2 de febrero de 2023, providencia en la que se resolvió adicionar el auto del 24 de octubre de 2022, se ejerció control de legalidad y se ordenó fijar en lista las excepciones previas presentadas por una de las demandadas.

De conformidad con lo anterior, le correspondía a la secretaria del juzgado realizar la fijación en lista de las excepciones previas. Sin embargo, alega que quien desempeñaba el cargo, actualmente se encuentra en licencia de maternidad, por lo que no es posible requerirla para que rinda informe sobre las razones por las que no realizó la actuación secretarial ordenada en auto del 2 de febrero de 2023.

Con relación al memorial de impulso procesal allegado por el quejoso el 25 de julio de 2023, indica la funcionaria judicial que a través de correo electrónico se le dio respuesta, en la que se le advirtió sobre la existencia de un gran cúmulo de trámites pendientes por ser adelantados.

Finalmente, afirma que el proceso se encuentra en secretaría, pendiente por fijarse en lista el traslado de las excepciones, y que una vez se realice dicha actuación, el expediente debe ser ingresado al despacho para resolver, por lo que considera que no se está ante una situación de mora, teniendo en cuenta la carga laboral de esa agencia judicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Solón Raúl Ferreira Pardo, dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

2.3. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por la funcionaria judicial requerida, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que la solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsa de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales involucrados.

2.4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8°, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona *“a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”*.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, lo cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades públicas de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada *“(...) pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular”*, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que *“el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general, contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales”*, en ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto *“la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia”*.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

(...)

Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.

(...)

En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado ha expresado: *“(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”*.

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, *“juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la*

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”.

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente, que de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”.*

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

“(…) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas”.

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho vigilado así como la gestión del servidor judicial, entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad entre otros, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no sólo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho *“se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese*

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

determinado momento (...)”.

2.5. Caso concreto

El señor Solón Raúl Ferreira Pardo solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado No. 13001311000320220008200, que cursa en el Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, debido a que, según indica, se encuentra pendiente de resolver solicitud de adición de auto adiado el 24 de octubre de 2022.

Respecto de las alegaciones del solicitante, la doctora María Bernarda Vargas Lemus, jueza, indica que el 11 de noviembre de 2022 se recibió solicitud de adición de la providencia adiada el 24 de octubre de 2022, a lo cual se accedió mediante providencia del 2 de febrero de 2023, en la que, además, se ejerció control de legalidad y se ordenó fijar en lista las excepciones previas presentadas por una de las demandadas.

Que el proceso se encuentra en secretaría, pendiente por fijarse en lista el traslado de las excepciones, y que una vez se realice dicha actuación debe ser ingresado al despacho para resolver, por lo que considera que no se está ante una situación de mora judicial.

Examinadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa, el informe rendido bajo la gravedad de juramento y los documentos aportados, esta Seccional encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Auto que niega recurso de reposición y reconoce personería jurídica	24/10/2022
2	Solicitud de adición del auto del 24 de octubre de 2022	11/11/2022
3	Ingreso al despacho	----
4	Auto que resuelve adicionar el auto del 24 de octubre de 2022 y ordenar fijar en listas las excepciones previas	02/02/2023
5	Publicación en estado	06/02/2023
6	Memorial de impulso procesal	25/07/2023
7	Respuesta por correo electrónico, en la que se indica que hay varios procesos pendientes por tramitarse	25/07/2023
8	Comunicación requerimiento de informe dentro de la solicitud de vigilancia	25/09/2023

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena en resolver solicitud de adición de auto adiado el 24 de octubre de 2022.

Se observa que el 2 de febrero de 2023 se profiere auto que ordenó, entre otras cosas, fijar en lista las excepciones previas y que a la fecha la actuación secretarial no se ha realizado, pese a que esta Seccional realizó la comunicación del requerimiento de informe el 25 de septiembre de la presente anualidad.

Se tiene que el 11 de noviembre de 2022 el quejoso presentó solicitud de adición del auto proferido el 24 de octubre de ese año; no obstante, al verificar las actuaciones registradas en el aplicativo TYBA no fue posible determinar la fecha en la que se ingresó al despacho, por lo que se tendrá que la actuación secretarial se surtió dentro del término dispuesto en el artículo 109 del Código General del Proceso, a saber:

“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes (...).”

Así las cosas, respecto la actuación de la doctora María Bernarda Vargas Lemus, jueza, se observa que entre la presentación de la solicitud el 11 de noviembre de 2022, y el auto adiado el 2 de febrero de 2023, que resolvió lo requerido, transcurrieron 40 días hábiles, término que supera el dispuesto en el artículo 120 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin (...).”

Ahora, no puede perderse de vista el argumento esbozado por la funcionaria judicial, en lo referente a que la tardanza presentada obedeció a la carga laboral soportada por el Despacho, por lo que esta Corporación pasará a verificar la información reportada en la plataforma estadística SIERJU respecto del período en el que se presume la mora.

PERÍODO	INVENTARIO INICIAL	INGRESOS	SALIDAS	EGRESOS	INVENTARIO FINAL
Año 2022	295	526	132	401	345
1° trimestre de 2023	342	156	36	68	394
2° trimestre de 2023	394	173	47	82	438

La carga efectiva es igual a inventario inicial más ingresos menos salidas, por lo que en el caso analizado se tiene:

Carga efectiva para el año 2022 = $(295+526) - 132$

Carga efectiva para el año 2022 = 689

Capacidad máxima de respuesta para Juzgado de Familia para el año 2022 = 653
(Acuerdo PCSJA22-11908 de 2022)

Carga efectiva para el 1° semestre del 2023 = $(342+329) - 83$

Carga efectiva para el 1° semestre del 2023 = 588

Capacidad máxima de respuesta para Juzgado de Familia para el año 2023 = 722
(Acuerdo PCSJA23-12040 de 2023)

Con base en las estadísticas anteriormente relacionadas, se encuentra que, en el año 2022 el despacho laboró con una carga efectiva equivalente al 105,5% respecto de la Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

capacidad máxima de respuesta establecida para ese año.

De igual manera, se observa que en el primer semestre de 2023, la funcionaria judicial laboró con una carga efectiva equivalente al 81,44% respecto de la capacidad máxima de respuesta establecida para el año 2023, de lo que se colige la situación del despacho en cuanto a sus cargas laborales.

Debe precisarse que el Consejo Superior de la Judicatura ha definido la “*capacidad máxima de respuesta*” como punto de referencia para establecer el número límite de procesos que pueden ser atendidos por un juzgado o despacho de magistrado, atendiendo a la capacidad humana y logística con la que cuenta dicha oficina para responder a la demanda de justicia; en el caso particular del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, se tiene que su carga laboral, demuestra la situación de congestión del despacho.

Igualmente, al consultar la producción del despacho en el período estudiado con anterioridad, se obtuvo el siguiente resultado:

TRIMESTRE	AUTOS INTERLOCUTORIOS	SENTENCIAS	PROMEDIO DE PROVIDENCIAS DICTADAS POR DÍA
2022	1546	199	7,6
1° - 2023	328	56	6,73
2° - 2023	400	66	8,32

Según el criterio esbozado por Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la mora sancionable en los funcionarios judiciales será aquella en la que quede demostrado que ha sido la negligencia la que ha reinado y no el trabajo, que a pesar de arduo, no dé el fruto esperado por las partes interesadas en el proceso. Así lo dispuso esa colegiatura en sentencia dentro del proceso N° 110010102000200202357:

“(...) lo anterior conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Sala que ha considerado que una de las formas en que se exteriorizan o materializan los esfuerzos de los funcionarios por evacuar su trabajo dice relación con la concreta producción laboral que registra estadísticamente. Para probar tal hecho, esta colegiatura ha convenido entonces en determinar como mínimo uno (1) el número diario de providencias de fondo (sentencias y autos interlocutorios) para mediante un proceso de confrontación con el tiempo hábil específicamente laborado establecer si en cada caso concreto es viable predicar esmero y dedicación en la ejecución de sus tareas propias de su función, y así considerar la excesiva carga de trabajo como la causa irresistible de la mora (...)”. (Subrayado fuera del texto original)

Se tiene entonces, de la aplicación de la fórmula propuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para el período en el que se presume la mora, que la funcionaria judicial presentó una producción superior a la mínima determinada, tal y como se desprende del cuadro señalado en líneas precedentes, cifras que, como producción laboral del despacho supera la establecida por esa sala. Por lo que bajo ese supuesto, no habría lugar a aplicar los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 respecto de la doctora María Bernarda Vargas Lemus, jueza 3° de Familia del Circuito de Cartagena.

Debe precisarse que la posición adoptada por esta seccional, no puede ser interpretada como una anuencia al incumplimiento de los términos judiciales por parte de los

operadores de justicia; por el contrario, obedece a un conjunto de situaciones objetivas que implica un estudio de los escenarios donde se desarrollan los debates procesales, los cuales están sometidos a situaciones “*imprevisibles e ineludibles*”, como el exceso de trabajo o la congestión judicial, que le impiden al juez, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, cumplir con los términos fijados en la ley, lo que a la postre causa una mora en la solución de los asuntos sometidos al conocimiento del respectivo despacho; en consecuencia, cuando se advierta la concurrencia de estos presupuestos fácticos, habrá lugar a justificar la mora judicial.

Con relación a la secretaría de esa agencia judicial, de conformidad a lo afirmado bajo la gravedad de juramento por la jueza y las actuaciones registradas en TYBA, se advierte, que entre la ejecutoria del auto adiado el 2 de febrero de 2023, y la comunicación del requerimiento de informe realizada por esta Corporación el 25 de septiembre de la presente anualidad, transcurrieron 152 días hábiles, sin que a la fecha se haya realizado la fijación en lista para el traslado de las excepciones previas. Si bien en el ordenamiento jurídico no se dispone un término expreso para realizar dicha actuación, se encuentra que la conducta desplegada resulta contraria a lo consagrado en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, a saber:

“ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(...)

2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. (...)

5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. (...)

20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias, así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe (...).”

De la norma citada se desprenden los deberes de los servidores judiciales, dentro de los cuales se incluye, actuar con celeridad, eficiencia y solicitud, lo cual no se evidencia en el caso bajo estudio. Además, dispone que los funcionarios y empleados deben adelantar las tareas que le sean asignadas, dentro de plazos razonables que garanticen los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los usuarios.

Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto por La Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC3377-2021 indicó que “*las personas tienen derecho «a obtener una decisión motiva[da] y razonable que ponga fin a la controversia planteada», amén del «derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso (...) el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, garantías de raigambre fundamental, disciplinan que las actuaciones judiciales se adelanten, y las resoluciones se adopten, en un lapso prudencial, en tanto los ciudadanos no pueden estar bajo la zozobra de la incertidumbre temporal (...).* (Subrayado fuera del texto original)

De igual manera, indica “*(...) este Tribunal ha señalado que el ‘plazo razonable’ al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva.*

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

(...)

La Corte usualmente ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (...)”.

De lo anterior se desprende la obligación que le asiste a los empleados judiciales de adelantar las actuaciones dentro de plazos razonables que garanticen los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los usuarios, de manera que no se puede justificar, ni entender, como un *plazo razonable*, la tardanza 152 días hábiles en fijar en lista las excepciones, destacándose que a la fecha sigue sin ser adelantada la actuación, aun cuando el solicitante presentó memorial de impulso procesal el 25 de julio de 2023.

Al verificarse los estados publicados en el microsítio de la agencia judicial, se advierte que, en el periodo en el que se ha mantenido la mora por parte de la secretaría, desempeñó el cargo la doctora Carolina Padilla Mora hasta el 23 de junio de 2023, y a partir del 26 de junio siguiente se encuentra como secretaria la doctora Cielo Troncoso Álvarez, habiéndose presentado memorial de impulso procesal el 25 de julio de la presente anualidad.

De conformidad con lo expuesto, al estar ante un escenario de presunta mora actual, y comoquiera que se aperturó el trámite respecto de la doctora Cielo Troncoso Álvarez, secretaria del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, es del caso aplicar los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por lo que se ordenará restarle un punto en el factor eficiencia o rendimiento de la calificación integral.

De igual manera, corresponde a esta corporación ordenar a la doctora Cielo Troncoso Álvarez, secretaria del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena normalizar la situación de deficiencia y proceder a fijar en lista las excepciones previas, de conformidad a lo dispuesto por la titular del despacho en auto del 2 de febrero de 2023, y posterior a ello, ingresar al despacho el expediente para que se resuelva lo requerido.

Finalmente, y al estar ante una conducta presuntamente disciplinable, de conformidad a lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1052 de 2019, se compulsarán copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que dentro de sus facultades investigue la conducta desplegada por las doctoras Carolina Padilla Mora y Cielo Troncoso Álvarez, en calidad de secretarías del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, conforme al ámbito de su competencia.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

III. RESUELVE

PRIMERO: Declarar, para todo los efectos legales y reglamentarios, que en el trámite del proceso verbal identificado con el radicado 13001311000320220008200, que cursa en el Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, se verificaron actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia y el anormal desempeño de sus labores, por parte de la secretaría de esa agencia judicial.

SEGUNDO: Ordenar a la doctora Cielo Troncoso Álvarez, secretaria del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, normalizar la situación de deficiencia y proceder a fijar Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena – Bolívar. Colombia

en lista las excepciones previas, de conformidad a lo dispuesto por la titular del despacho en auto del 2 de febrero de 2023, y posterior a ello, ingresar al despacho el expediente para ser resuelto lo requerido.

TERCERO: Archivar respecto de la doctora María Bernarda Vargas Lemus, en calidad de Jueza 3° de Familia del Circuito de Cartagena, la solicitud vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Solón Raúl Ferreira Pardo, por las razones anotadas.

CUARTO: Restar un punto en la consolidación de la calificación en el factor eficiencia o rendimiento del período de 2023, de la doctora Cielo Troncoso Álvarez.

QUINTO: Compulsar copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que, en atención a lo consignado, investigue las conductas desplegadas por las doctoras Carolina Padilla Mora y Cielo Troncoso Álvarez, en calidad de secretarias del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena, en el trámite del proceso de marras, conforme al ámbito de su competencia.

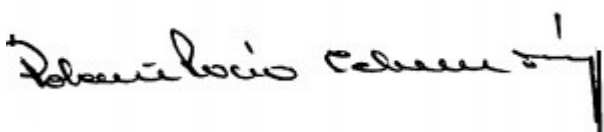
SEXTO: Notificar la presente decisión a la doctora Cielo Troncoso Álvarez, secretaria del Juzgado 3° de Familia del Circuito de Cartagena.

SÉPTIMO: Comunicar la presente resolución al solicitante, así como a la doctora María Bernarda Vargas Lemus, jueza 3° de Familia del Circuito de Cartagena.

OCTAVO: Una vez en firme la decisión, procédase a comunicar la decisión a la doctora María Bernarda Vargas Lemus, jueza 3° de Familia del Circuito de Cartagena, en calidad de nominadora, para los fines pertinentes.

NOVENO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

MP. IELG/MFLH